

La Alianza Popular para la Producción: los límites de un nuevo estilo

La transmisión del poder en todo sistema presidencial es siempre portadora de grandes expectativas de renovación. Esto resulta especialmente cierto en un régimen netamente presidencialista como el nuestro, donde las esperanzas de cambios prometedores están en función directa de la figura y personalidad del nuevo "elegido". A una semana escasa de la transferencia de la banda presidencial, resultan ya innumerables las demostraciones de confianza y apoyo que, provenientes de los sectores más diversos de la sociedad mexicana, han sido otorgadas a quien asumiera entonces el poder supremo cobijado por un halo un tanto mesiánico.

En efecto, el mismo día en que López Portillo leyera su mensaje de toma de posesión en el que esbozara como punto nodal de su proyecto económico la llamada "Alianza Popular para la Producción", se manifestaron en su favor el sector privado, los representantes de intereses extranjeros y, desde luego, el partido oficial y sus dos satélites: el PPS y el PARM. De manera sorpresiva, expresaron también su apoyo sindicatos independientes como el de los telefonistas, e inusitadamente el Partido de Acción Nacional llegó al extremo de despojarse de su naturaleza tradicional de oposición institucionalizada, afirmando que con el nuevo presidente no sería más de oposición, pues estaba dispuesto a responder al llamado de unidad nacional y de conciliación de los intereses más encontrados.

No es difícil explicar qué fue lo que motivó esta ola de manifestaciones de apoyo. La tasa inflacionaria del 30 por ciento, el amenazante déficit presupuestario y la desocupación del 30 por ciento de la fuerza de trabajo, sumados a las últimas demostraciones de fuerza del poder presidencial —traducidas en la expropiación de más de 100 000 hectáreas de riego en los Valles del Yaqui y el Mayo, llamados el "granero" de México—, al espectro del maxismo y a los ampliamente difundidos rumores de un golpe de Estado, habían creado una atmósfera asfixiante de desconfianza y desencanto que clamaba a grandes voces una figura milagrosa capaz de borrar todos los signos ominosos.

Las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas. La inminente crisis económica, prueba fehaciente del fracaso del modelo de desarrollo que el Estado mexicano había impulsado a lo largo de más de 30 años, puso en entredicho no sólo la capacidad del Estado como promotor del desarrollo, como fuerza habilitada para sacar al país del "bache económico", sino la legitimidad misma de la figura presidencial. El efecto negativo que las dos devaluaciones provocaran sobre los proyectos vitales, fundamentalmente de las clases medias, crearon una sensación de desprotección y abandono que desembocó

en el desprestigio de todas las acciones que en un momento dado parecieron dignas de alabanza.

El reconocimiento que se ofreciera al presidente saliente como abanderado de las causas de las grandes mayorías, como denunciante de los empresarios egoístas y despatriados y como fiel defensor del Tercer Mundo se esfumó, dejando a flor de piel una vez más la endeble memoria histórica del pueblo de México y evidenciando el condicionamiento de estas demostraciones a dictados favorables.

La inquietud, la alarma y el vacío que dejara la deteriorada autoridad del presidente y del sistema político en su conjunto habían sensibilizado la opinión pública al llamado de reconciliación y solidaridad. Fue el momento psicológico el que dio verdadera significación al proyecto económico propuesto y el que lo erigió en panacea de la restauración del sentimiento de seguridad y confianza.

La hora y 45 minutos que durara el mensaje a la nación fueron más que suficientes para borrar por completo el arrastre del antiguo estilo, ya tan familiar a todos, y para construir e identificar sin confusión posible la nueva imagen del gobernante. No se trataba ya del eterno fiscal acusador de las minorías, era ahora el conciliador; ya no era el que manejaba la compleja y a veces incomprensible retórica, era el orador sobrio y sincero; ya no era el hombre sólido, de una pieza, era la figura del padre sensitivo y tolerante. Todos estos atributos, configuradores de un nuevo estilo, fueron investidos del carácter de reveladores de grandes cambios.

El nuevo héroe estaba forjado, y no a pesar de todos los obstáculos que su predecesor pusiera en el camino, sino precisamente gracias a ellos. No estaban rotos aún los vínculos con aquel que lo designara. A él le debía el impacto que su personalidad, hasta entonces un tanto desdibujada, ejerciera instantáneamente. Aceptar la existencia de graves problemas no fue visto como la imposibilidad de negar su inminencia, sino como una valerosa muestra de franqueza, siempre tan reconfortante en un mundo de ocultamientos de la realidad palpable.

Si bien es cierto que el tinte que cobrara la ceremonia —por el nuevo estilo que se forjaba— fue esencial para los efectos entusiastas que el cambio de poderes produjera, no es menos cierto que fue el contenido del proyecto económico claramente delineado el que contribuyó de manera destacada a fortalecer dichos efectos, dotándolos de una sustentación menos emotiva y más concreta.

¿En qué consiste este proyecto económico que parece contar ya con la anuencia generalizada?

El programa de la "Alianza Popular para la Producción" se concibe como un proyecto nacional de esfuerzo compartido en torno a una unidad de propósitos que permita conciliar los distintos factores de la producción. En realidad se trata de un pacto entre las distintas clases sociales, encaminado a eliminar las barreras entre éstas en aras de un proyecto de reconstitución nacional. Es un llamado a que las clases se despojen de sus intereses propios

con el objeto de evitar que unos intereses se encaramen y predominen sobre los otros. Sus objetivos explícitos consisten en incorporar al proceso económico global, y consecuentemente a sus productos, a aquellos sectores y zonas que hasta hoy han estado marginados. Dicho de otra manera, su meta es alcanzar un desarrollo económico integral que abarque a toda la población.

Este proyecto conlleva, previo diagnóstico de la economía nacional, el rechazo a aquellos programas de crecimiento económico basados en la persecución de incrementos porcentuales y la adopción de uno orientado a la distribución más equitativa de los beneficios. Requisito inaplazable para la realización de este proyecto es la reedificación de un Estado fuerte y ampliamente legitimado, el cual sentará las pautas para la realización de la tregua.

Hasta el momento, la "Alianza Popular para la Producción" se ha traducido en un pacto de colaboración entre el Estado y los empresarios "nacionalistas" que, según el secretario de Hacienda, quedará sellado a fines de esta semana, dejando establecidas nuevas formas de producción que redunden en la generación de más y mejores empleos. A pesar de la atmósfera conciliadora, el sector privado no ha tardado en negar esta afirmación, admitiendo únicamente la existencia de un compromiso moral, que no formal, siempre que la programación económica delimite claramente los campos de ingerencia propios de cada sector.

Acompañan a este supuesto pacto dos iniciativas de reforma administrativa que incluyen un proyecto de Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en el que se contempla la jerarquización de las asignaciones presupuestarias, de suerte que sea la producción de recursos naturales renovables y la explotación de los no renovables las que reciban destacada prioridad y sólo en segunda instancia los rubros de educación y bienestar social.

Los empresarios se han mostrado favorables a esta iniciativa en tanto esperan que las autoridades proporcionen incentivos no sólo para la inversión, sino también para la reinversión, lo que según su punto de vista significa la reducción en los impuestos a la exportación e importación.

Las oportunidades que el nascente régimen parece ofrecer al sector privado no son, de ninguna manera, novedosas. El esfuerzo por mantener a toda costa los niveles de crecimiento perpetuados a lo largo de tres décadas forzaron al Estado a recurrir al endeudamiento externo, al cual el país se halla actualmente hipotecado.

Rebasada totalmente la capacidad de pago y reducidos los márgenes de negociación de la deuda, el Estado ha preferido aceptar las medidas y políticas determinadas por las grandes instituciones internacionales de crédito.

En efecto, en días pasados el Fondo Monetario Internacional concedió a México un nuevo préstamo por 2 000 millones de dólares a condición de que se reorganizara la inversión pública, volcándose prioritariamente hacia los sectores rentables. Efectuada esta concesión antes del primero de diciembre, ahora empiezan a establecerse las medidas necesarias para su realización.

El propósito explícito de promover la producción y la productividad sin limitar el derecho legítimo de obtener utilidades ha despertado en el sector empresarial la simpatía por el proyecto económico del presente régimen.

Una vez concluido el sexenio en el que la iniciativa privada fue acremente acusada y señalada como desleal y traidora —pero en el que, paradójicamente, recabó las ganancias más elevadas—, acudir al llamado del gobierno no solamente le ofrece la oportunidad de recuperar su papel de fuerza indispensable para implantar cualquier proyecto nacional, sino de reivindicar la imagen de la que históricamente se ha apropiado, aquélla que su interés no es sino el de la comunidad en su conjunto. Tal parece que más que una alianza entre los factores de la producción, se trata más bien de una alianza entre los poseedores de capital. Las grandes masas obreras y campesinas no están todavía incluidas en este proyecto.

En lo que se refiere a la originalidad de la propuesta, no hay tal; pero tampoco tendría por qué haberla. Es válido aprovechar antiguas sugerencias aún vigentes. Ya en 1969, en ocasión de la pugna por la nominación del candidato presidencial, un grupo de destacados intelectuales —hoy en su mayoría altos funcionarios gubernamentales— formuló un proyecto para quien entonces parecía perfilarse como el candidato más viable. Dicho estudio contemplaba un programa nacional de desarrollo a través de la unión de los recursos de todos los sectores del país, enfocado a abandonar el concepto de desarrollo medido en términos de incrementos en el producto nacional bruto y a hacer frente al imperativo de una mejor distribución de la riqueza.

Más aún, el llamado a las clases a que depongan sus luchas y consoliden una tregua en favor de los grandes objetivos nacionales ha sido la tesis por excelencia de la revolución mexicana.

La denominación del proyecto sí es novedosa, como novedosas serán las modalidades que se impriman a su aplicación. Pero, ¿cuáles serán los resultados del proyecto y del nuevo estilo? Esperemos el año y medio fijado como plazo para la recuperación económica del país. Sólo entonces estaremos en posibilidad de vislumbrar los posibles alcances de un proyecto económico que ha dejado soslayado el proyecto político.

9 de diciembre de 1976

Jacqueline Peschard